

GACETA OFICIAL

ORGANO DEL ESTADO

AÑO XC I

PANAMA, R. DE P., JUEVES 5 DE MAYO DE 1994

Nº 22.529

CONTENIDO

MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO

Dirección General de Ingresos
RESOLUCION Nº 201-798
(De 22 de abril de 1994)

MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATO Nº 33
(De 21 de abril de 1994)

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

CONTRATO Nº U.T.P. DC-13-93
(De 15 de diciembre de 1993)

CONTRATO Nº U.T.P. DC-14-93
(De 15 de diciembre de 1993)

ESTA MARCA LE INDICA
DEPTO. DE CORRESPONDENCIA
ARCHIVO Y MIGRACIONES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fallo del 21 de julio de 1993

Fallo del 19 de noviembre de 1993

AVISOS Y EDICTOS

MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO

Dirección General de Ingresos
RESOLUCION Nº 201-798
(De 22 de abril de 1994)

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS
en uso de sus facultades que le confiere la Ley,

C O N S I D E R A N D O :

Que el artículo 6 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970 faculta al Director General de Impuestos para dictar normas obligatorias que regulen las relaciones fisco-contribuyente.

Que ante esta Dirección General de Ingresos, se presentan solicitudes de Asociaciones sin fines lucrativos, en el sentido de que se les autorice realizar colectas a las casetas de peajes de la Autopista Arraijan-La Chorrera.

Que se hace necesario reglamentar todo lo concerniente a las autorizaciones que se expedían para que personas colectas no perjudiquen ni a los usuarios de la vía, ni a los funcionarios de la Administración Tributaria que realizan su trabajo en la mencionada vía;

GACETA OFICIAL

ORGANO DEL ESTADO

Fundada por el Decreto de Gabinete Nº 10 de 11 de noviembre de 1903

REYNALDO GUTIERREZ VALDES
DIRECTOR

MARGARITA CEDEÑO B.
SUBDIRECTORA

OFICINA

Avenida Norte (Eloy Alfaro) y Calle 3a. Casa No. 3-12,
Edificio Casa Amarilla, San Felipe Ciudad de Panamá,
Teléfono 28-8631, Apartado Postal 2189
Panamá, República de Panamá

LEYES AVISOS, EDICTOS Y OTRAS
PUBLICACIONES

NUMERO SUELTO: B/. 0.75

Dirección General de Ingresos

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES

Mínimo 6 Meses en la República: B/.18.00

Un año en la República B/.36.00

En el exterior 6 meses B/.18.00, más porte aéreo

Un año en el exterior, B/.36.00, más porte aéreo

Todo pago adelantado

R E S U E L V E :

PRIMERO: La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, autorizará a través de la Administración Regional de Ingresos, de la Provincia de Panamá, a aquellas Asociaciones sin fines lucrativos, o Clubes Cívicos a realizar colectas en las casetas de Peaje, de la Autopista Arraijan-La Chorrera, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

- A.- El número de personas recolectoras no podrá ser mayor de tres (3) debidamente identificadas con distintivos (carnets, chalecos, etc), de la fundación o entidad recolectora.
- B.- La colecta no podrá extenderse por un periodo mayor de tres (3) días y el horario de las mismas será entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.
- C.- Las personas recolectoras no podrán hacerse acompañar de familiares o amigos. No se autorizará a una misma entidad sin fines lucrativos a realizar más de dos (2) colectas al año, así como no se permitirá más de dos (2) colectas por mes.
- D.- En ningún caso se autorizará a una entidad que no este reconocida ante este Ministerio como una Asociación sin Fines Lucrativos, a realizar colectas o promociones.

SEGUNDO: Cualquier infracción a la presente Resolución conllevará a la cancelación inmediata de la autorización y por ende el retiro de las personas recolectoras.

TERCERO: Esta Resolución comenzará a regir a los quince (15) días hábiles después de su publicación en la Gaceta Oficial y contra ello no habrá Recurso alguno en la vía querellativa.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 6 del Decreto de Gabinete 100 de 7 de mayo de 1970.

PUBLICSE Y CUMPLASE

DR. ALVARO A. ALEMAN H.
Director General de Ingresos

ALBERTO GUERRA
Secretario

MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATO N° 23
DE 27 OCTUBRE 1993

Entre quienes suscriten, a saber MARCO AL ALBERDI P., ciudadano, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal N° 9-14-5566, vecino de esta ciudad, en su condición de Ministro de Educación, denominado Autorizado por el Presidente de la República mediante el Decreto N° 8 de 9 de Abril de 1993, actuando en nombre y representación de EL ESTADO, por un lado, y por la otra parte FRANCIS AMARIA, mayor de edad vecino de esta ciudad, en su condición de identidad personal 1048-96-1982, en nombre y representación de La firma Andrade, S.A., inscrita en la Registraduría de Sociedades Mercantiles del Registro Público, Dirección de Hacienda, Piso 9º, Oficina 9020, Asiento 11, Paseo Industrial número 80, actuando en su calidad de director de 17 de octubre de 1993, en adelante EL CONTRATISTA y contratado aquí más tarde respectivamente Nicanor Vélez de la Cruz de 17 de octubre de 1993, quien cumple en calidad de presidente Contrato de Construcción de obras, se constituyó por la Comisión de Presupuesto, Selección y Adquisición, existente entre el Gobierno de la República de Panamá y la Sociedad Interamericana de Desarrollo (SIDA), el 27 de noviembre de 1986, en virtud de la que el mismo concedió por el Decreto de Subsidio, en su sesión celebrada el 24 de noviembre de 1993, de acuerdo con los términos de la Gaceta 2 y 3 de la misma fecha.

CLÁUSULA PRIMERA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. El ESTADO:
 - a) Propietario del terreno, para el desarrollo del Municipio de Balboa, Provincia de Panamá, Distrito Capital, Ejecutivo, dentro de su competencia, para el desarrollo de:
 - b) El CONTRATISTA.
2. El CONTRATISTA:
 - a) El diseño, ejecución y entrega de las siguientes obras: Construcción de viviendas, en calidad de vivienda social, destinadas al grupo de población de bajos recursos; y construcción de viviendas y servicios, en calidad de vivienda social, destinadas a la clase media y alta;
 - b) El costo total de la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - c) El pago;
 - d) Firma de IMPRESO.
3. La PERTINENCIA:
 - a) Que el ejecutorio que se celebre en el caso de la ejecución de las operaciones que realizan las autoridades administrativas, no interfiera directamente en la ejecución de las obras y en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato;
 - b) Que el ejecutorio no interfiera en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato;
 - c) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - d) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - e) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - f) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - g) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - h) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - i) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - j) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - k) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - l) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - m) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - n) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - o) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - p) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - q) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - r) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - s) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - t) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - u) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - v) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - w) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - x) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - y) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;
 - z) Que el ejecutorio no interfiera en la ejecución de las obras mencionadas en la letra anterior;

CLÁUSULA SEGUNDA

El estipulado en este contrato, quedará sujeto a lo establecido en el Decreto N° 23 de 27 de octubre de 1993, en su texto integral, así como a las leyes y reglamentos nacionales y las normas internacionales que rigen las relaciones entre el Estado y las personas jurídicas de derecho público y las personas naturales que intervienen en la ejecución de las obras.

CLÁUSULA TERCERA

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CLÁUSULAS

La cláusula de cláusulas particulares, quedará sujeta a lo establecido en el Decreto N° 23 de 27 de octubre de 1993, en su texto integral.

CLÁUSULA CUARTA

CLÁUSULA QUINTA

El CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones: a) Cumplir las normas y reglamentos que rigen las relaciones entre el Estado y las personas jurídicas de derecho público y las personas naturales que intervienen en la ejecución de las obras. b) Cumplir las normas y reglamentos que rigen las relaciones entre el Estado y las personas jurídicas de derecho público y las personas naturales que intervienen en la ejecución de las obras.

CLÁUSULA SEXTA

ANEXOS

1. Anexo 1: Especificación
2. Anexo 2: Especificación
3. Anexo 3: Especificación

CLÁUSULA SÉPTIMA

CLÁUSULAS DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es comprometido a lo siguiente:

- a) Suministrar todos los materiales, equipos y maquinaria de primera calidad, tecnologías, incluyendo modernizada, segura, energías alternativas, mano de obra y cualquier otra o servicio necesario para la ejecución efectiva y satisfactoria terminación de la obra, a que se refiere en la letra 3 de la Cláusula Quinta.
- b) Ejecutar todo lo requerido para el desarrollo de las obras, incluyendo y separadamente, sus alineamientos de rutas, edificaciones de ferrocarriles, puentes, tuberías, líneas y de intercambios, siendo dentro de esta Cláusula, comprendido tanto en caso de cualquier circunstancia entre las plazas y separadamente o entre otras plazas y terminaciones y separadamente a medida en los gastos, para la ejecución de la ejecución de la obra, cumpliendo con las disposiciones y normas establecidas en el Decreto de Presupuesto, Selección y Adquisición, suscrita entre el Gobierno de la República de Panamá y la Sociedad Interamericana de Desarrollo (SIDA), el 27 de noviembre de 1986, en virtud de la que el mismo concedió por el Decreto de Subsidio, en su sesión celebrada el 24 de noviembre de 1993, de acuerdo con los términos de la Gaceta 2 y 3 de la misma fecha.

c) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

d) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

e) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

f) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

g) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

h) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

i) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

j) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

k) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

l) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

m) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

n) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

o) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

p) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

q) Prestar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

CLÁUSULAS DE EL ESTADO

EL ESTADO se compromete a lo siguiente:

a) Suministrar en su calidad de ejecutor las obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta.

DETALLE

EL SISTEMA DE BAJOS PAGOS es el sistema de sueldos que se implementa y se establece en el EL CIBERDINAM, cuando la magnitud de los egresos de gastos corrientes de acuerdo con las normas de presupuesto permitido establecer la habilitación para ejecutar el gasto. El equipo constituye delimitar que funcionamiento tiene en la ejecución. El sistema por lo tanto es equivalente a la del egreso que se dispone en el Presupuesto de acuerdo con el criterio por el que se establece el sistema.

DETALLE

EL SISTEMA DE BAJOS PAGOS es establecido en todos los sectores de la Rep. de Panamá, un sistema de gastos que tienen la función de responder a los requerimientos objeto de este sistema ya sea que sea dentro de la propia institución o bien entre el personal que no tienen competencias correspondientes con los que hacen operaciones.

DETALLE

EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ CON SEDE EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, ES EL ÚNICO INSTITUTO que tiene la facultad de autorizar y controlar los movimientos moneda extranjera que realizan los residentes, no residentes, no nacionales, norteamericanos, etc., en el territorio de la República de Panamá, con excepción de las autorizaciones que se realizan a través de la Oficina de Representación de Colón, C.R.P. mediante otras entidades después de presentarse la documentación.

DETALLE

EL SISTEMA DE BAJOS PAGOS es establecido en el año 1990 por el presidente de la Republica de Panamá mediante la orden ejecutiva número 4401.

DETALLE

DETALLE:

Concepto	Recaudado	Gasto Total
1.01.1.3.0.00.07.120	022.000.000.000	135.220.000.000
1.01.1.3.0.00.07.121	022.000.000.000	135.220.000.000
1.01.1.3.0.00.07.122	022.000.000.000	135.220.000.000

Periodo: 01/01/1993 al 31/12/1993

DETALLE: Es una forma de recaudación de los impuestos que se establece en el Código General de Impuestos.

DETALLE

DETALLE: Es cuando los servidores en administración del personal reciben una parte de los salarios que se les paga por el ministerio o dependencia de que dependen, siendo la otra parte de su salario recibida por el ciberdinam.

DETALLE

DETALLE: Es una forma de recaudación de los impuestos que se establece en el Código General de Impuestos.

DETALLE

DETALLE:

Concepto	Recaudado	Gasto Total
1.01.1.3.0.00.07.120	022.000.000.000	135.220.000.000
1.01.1.3.0.00.07.121	022.000.000.000	135.220.000.000
1.01.1.3.0.00.07.122	022.000.000.000	135.220.000.000

DETALLE: Es una forma de recaudación de los impuestos que se establece en el Código General de Impuestos.

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

ESTRUCTURA ORGANICA		ESTRUCTURA FUNCIONAL	
1. SECRETARIA DE ESTADO	1.1. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1.1. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
2. MINISTERIOS	2.1. MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIAS Y COMERCIO	2.1. MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIAS Y COMERCIO	2.1. MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIAS Y COMERCIO
3. DIRECCIONES	3.1. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS	3.1. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS	3.1. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS
4. CONSULATOS	4.1. CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN CARACAS	4.1. CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN CARACAS	4.1. CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN CARACAS
5. AGENCIAS	5.1. AGENCIA DE INVESTIGACIONES FEDERALES (F.B.I.)	5.1. AGENCIA DE INVESTIGACIONES FEDERALES (F.B.I.)	5.1. AGENCIA DE INVESTIGACIONES FEDERALES (F.B.I.)
6. BANCO NACIONAL	6.1. BANCO NACIONAL DE PANAMA	6.1. BANCO NACIONAL DE PANAMA	6.1. BANCO NACIONAL DE PANAMA
7. FONDO NACIONAL	7.1. FONDO NACIONAL DE INVERSIONES	7.1. FONDO NACIONAL DE INVERSIONES	7.1. FONDO NACIONAL DE INVERSIONES
8. OFICINAS TÉCNICAS	8.1. OFICINA TECNICA DE INVESTIGACIONES FEDERALES (F.B.I.)	8.1. OFICINA TECNICA DE INVESTIGACIONES FEDERALES (F.B.I.)	8.1. OFICINA TECNICA DE INVESTIGACIONES FEDERALES (F.B.I.)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

Nº 22.529
CONVENIO MÚLTILO - N°. 1100/93, INTERNACIONAL, CLAS.
(15 de Octubre de 1993)

TOTAL EDICION 4.511 - PÁGINAS 140

CONTRATO DEPL. AG. BUREAU INTERCONTINENTAL S.A.

DEMANDANTES: Madsa por su representante, la apoderada de defensa en el
Corte de Justicia de Panamá, Mrs. Rosalba, Céspedes, D.F., del Distrito
de David.

Página de la Gaceta Oficial, o las páginas del mes de diciembre de 1993.

EL ASESOR:
MICHAEL SALOMON BETTACK
CARRERA 10 # 80-10EL COLEGADO:
ING. HÉCTOR MONTAÑAY,
Universidad Tecnológica de PanamáDECIMO TERCEROS: Se cancela la demanda administrativa del presente contenido
en la que se solicita la liquidación, el desembolso por parte de El Municipio de David para la obligación
impuesta por este ente, dentro de lo establecido en el
Artículo 88 del Código Judical.DOS LOS CEDENCO MEFI
AV. 10 DE NOVIEMBRE
PANAMÁ
Luis Guillermo Rosas
Comisionado Oficial de los Poderes

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Fallo del 21 de julio de 1993

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, interpuesta por la firma Trujillo, Vidal y Miranda, en representación de CARLOS RODRIGO ORTIZ CEDENO Y FRANK MOSTINER SURGEON BROWN para que se declare nulo por ilegal, el artículo primero en su numeral 1.2.5.61 del acuerdo N°8 de 26 de febrero de 1992 emitido por el CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DAVID.

MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINA MOLA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Pieno.- Panamá, veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).-

V I S T O S:

La firma panameña TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA actuando en representación de los señores CARLOS RODRIGO ORTIZ CEDENO Y FRANK MOSTINER SURGEON BROWN ha presentado demanda Contencioso Administrativo de Nulidad para que se declare nulo por ilegal, el punto 1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo Municipal N°8 de 26 de febrero de 1992, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de David, así como la liquidación de la Deuda Pública Municipal de David, en relación a la Clínica Dental del señor CARLOS ORTIZ, fechada 2 de mayo de 1991.

Considera el recurrente que el acuerdo municipal, en el punto impugnado, así como la liquidación del deudor municipal, por impuesto directamente a la Clínica Dental del señor CARLOS ORTIZ resulta violatorio de los artículos 12 y 20 numeral 1º, de la Constitución de la República de Panamá de 1972.

De la demanda suscitada se observa que el señor Presidente del Consejo Municipal de David, en su calidad, ha iniciado el recaudar la cifra de quinientos mil pesos,

de igual forma se dio trámite al señor Director de la Administración, quien autorizó a la Clínica Dental para que procediera parcialmente a las prestaciones que correspondían (Cfr. folio 46-54 del expediente).

Una vez surtidos todos los trámites establecidos para este tipo de procesos, tal como se desprende del informe ministerial visible a foja 52 del expediente, procede la Sala Superior a desatar la controvención instaurada.

Observa el tribunal que la retención de fondo de la parte demandante estriba en que esta superioridad deriva la nulidad del punto 1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo Municipal referido, que ha gravado con un impuesto municipal que oscila entre los B/.15,00 y B/.125,00 mensuales a los laboratorios y clínicas privadas.

En efecto, el citado numeral ha establecido entre los impuestos indirectos del Municipio de David, un gravamen para los laboratorios y clínicas Privadas, tal como consta a foja 5 del expediente, a saber:

"ARTICULO PRIMERO Se refiere al punto 1.2.5.61 LABORATORIOS Y CLÍNICAS PRIVADAS. Fijando por uno o más de los tres años de B/.15,00 a B/.125,00"

IMPUESTO INDIRECTO

Estima el actor que tal acuerdo, en la forma en que ha sido establecido en el Acuerdo Municipal, es innecesario y no obilita con especificidad el arbitrio impositivo del mismo.

La Ley 156 de 1970 en su numeral 39 contempla, según el recurrente, la posibilidad de crear la actividad de las clínicas comerciales e industriales de propiedad privada o de servicio público, ese no es aquello que se pretenda ni se trata de profesional en calidad del ejercicio de una profesión libérrima.

El demandante al fundamentar sus argumentos de la siguiente forma:

"El numeral 39 del mencionado decreto establece que las actividades de servicios de las empresas de propiedades privadas o de servicios de la industria, de comercio, de clínicas, de industrias de servicios, de laboratorios o de servicios de profesionales y de servicios profesionales se podrán practicar libremente, por otra modalidad que la establecida en el numeral 19 del mismo decreto."

El Municipio de David estableció que las clínicas y laboratorios privados debían pagar

el impuesto establecido en el numeral 1.2.5.61, lo que resulta en la medida de lo posible contrario a lo establecido en la legislación mencionada, ya que el numeral 39 establece que las personas, las cuales se ejercen profesiones, no se someterán al gravamen establecido en el numeral 19 del mencionado decreto.

En consecuencia, el actor considera que el acuerdo municipal es contrario a la legislación mencionada, ya que establece que las personas que ejercen profesiones no se someterán al gravamen establecido en el numeral 19 del mencionado decreto.

declare la nulidad por ilegal del numeral 1.1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo N°8 de 26 de febrero de 1987, que a su vez reforma el Acuerdo N°43 del 29 de diciembre de 1986, porque de no hacerlo, queda el Consejo

Municipal del Distrito de David, en libertad de gravar el resto de las profesiones liberales, tales como la abogacía, Ingeniería, Contabilidad, Arquitectura y otros, cuando ese no es el espíritu de la ley".

Por su parte, el señor Procurador de la Administración,

al emitir concepto sobre la nulidad solicitada, ha señalado:

"Compartimos la opinión del demandante, que al gravarse con impuesto municipal mensual los Laboratorios y Clínicas Privadas, mediante Acuerdo N°8 de 26 de febrero de 1987, el Consejo Municipal no se ajustó a lo establecido en los artículos 74 y 75 (numeral 30) de la Ley 106 de 1973, puesto que no todos los Laboratorios y Clíni-

cas Privadas son establecimientos comerciales o industriales, ya que no tiene esa connotación las instalaciones en que se prestan servicios profesionales, los cuales no pueden ser objeto de gravámenes o impuestos de ninguna naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 de la Constitución Nacional".

La Sala Tercera en vista de estos señalamientos, y una vez analizadas las circunstancias del negocio, procede a externar lo siguiente:

La Ley 106 de 1973 en sus artículos 74 y 75 señala taxativamente:

"Artículo 74. Son gravables por los Municipios con impuestos y contribuciones todas las actividades industriales, comerciales e lucrativas de cualquier clase que se realicen en el Distrito".

"Artículo 75. Son gravables por los

Municipios las actividades siguientes:
.....
302. Laboratorios y clínicas comerciales e industriales de propiedad privada, o de servicio público;" (subrayado es nuestro)

Se observa al confrontar las normas legales supracitadas con el punto 1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo Municipal del Distrito de David N°8 de 1987, que éste no precisa con claridad cuál es el supuesto incentivo del gravamen creado, por lo que no permite establecer si el Municipio de David pretende gravar a todas las clínicas y laboratorios privadas sin distinción, o sólo a aquellas que se dedican a ejercer actividades lucrativas en adición al ejercicio profesional.

Existen clínicas y laboratorios privados que no pueden considerarse como de naturaleza comercial o industrial, y que debido a la ambigüedad del gravamen creado, pueden quedar sujetas al impuesto municipal.

La distinción jurídica entre las situaciones señaladas resulta de trascendencia significativa, en virtud de que la actividad del profesional no está sujeta a ningún gravamen impuesto o contribución, tal como lo ha establecido expresamente la Constitución Nacional.

mente la Constitución Nacional en su artículo 40, y lo ha reafirmado la Corte Suprema a través de esta Sala en diversas ocasiones; v.g.: resolución de 6 de noviembre de 1992, en relación a la demanda Contencioso Administrativa de Filena Jurisdicción interpuesta por la Clínica Arango Grillac, S.R.L., contra la Dirección General de Indresco.

La Sala Tercera considera por tanto, que el gravamen contemplado en el Acuerdo Municipal 1228 de 1992 para los "Laboratorios y Clínicas Privadas" no se ajusta plenamente al presupuesto legal contemplado en el numeral 3º del artículo 7º de la Ley 106 de 1973, que hace referencia a Laboratorios y clínicas privadas, comerciales e industriales, y que tal imprecisión constituye una lesión al orden legal, al exceder el Acuerdo Municipal en el punto impugnado, la potestad impositiva que le concede la Ley 106 de 1973 a los Municipios para gravar específicamente las clínicas y laboratorios comerciales e industriales (artículo 7º numeral 3º), y contemplando generalmente las actividades industriales, comerciales y administrativas realizadas en el territorio (artículo 7º numeral 1º de la Ley 106 de 1973).

Este señalar además que la aplicación directa de la Ley 106 de 1973 sobre el sector de las clínicas y laboratorios privados violaría el principio de no discriminación establecido en la Constitución, siendo también violatoria del principio de no discriminación entre clínicas y laboratorios que no realizan el ejercicio profesional, actividad ésta que se considera el ejercicio profesional, actividad ésta que tal como ha sido regulada por el decreto 1000 de 1991, es de carácter público.

En atención a lo anteriormente expuesto, la Sala Tercera declara la nulidad del acuerdo municipal 1228 de 1992, en su artículo 7º numeral 3º, en lo que respecta a la imposición de la tasa de 10% sobre las clínicas y laboratorios privados.

Contra la sentencia que se dicta en la presente, se podrá interponer recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

del Distrito de David, al exigir el pago a la Clínica Dental del señor **CARLOS ORTIZ** (visible a foja 19 del expediente) de B/.15.00 mensuales en concepto del gravamen establecido en el punto 1.2.5.61 del Distrito de David, y de B/.5.00 en concepto de rótulo anual del establecimiento.

Sobre este particular es preciso recordarle al recurrente que no es posible mediante la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad dirimir la afectación directa de los derechos subjetivos del demandante, toda vez que ello sólo es posible mediante la acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, tal como este Tribunal ha reiterado en numerosas ocasiones, en aplicación a las Leyes 115 de 1943 y 33 de 1946 reguladoras de los procesos contencioso administrativos.

En este orden de ideas debe negar la Sala la procedencia de la declaratoria de ilegalidad del cobro del gravamen descrito, puesto que el mismo no constituye un acto general, impersonal u objetivo, sino una situación jurídica individual, producto de la aplicación del derecho municipal (acto subjetivo).

La vía idónea por tanto para solicitar la reparación del derecho subjetivo supuestamente vulnerado es la demanda contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción.

Es importante aclarar que el actor no solicita la declaratoria de ilegalidad de la parte pertinente del Decreto Municipal de David (MS de 1947, punto 1101.112.5.607 del artículo primero), que establece el gravamen a rótulos y anuncios que identifican las mercancías, sin que esté dirigida contra la liquidación del impuesto municipal ni calzada a la Clínica Dental del demandante, lo cual impone una pronta, titubeciar con respecto a tal situación de cumplir o infringir dichas obligaciones en su caso correspondiente en el procedimiento administrativo de nulidad.

Este Tribunal, una vez analizadas integralmente las circunstancias de derecho que rodean al negocio, considera que el punto 1.2.5.61 del Acuerdo Municipal N°8 de 26 de febrero de 1987 emitido por el Consejo Municipal del Distrito de David, de la manera en que aparece expresado en este Acuerdo, es ilegal, pues su imprescisión y ambigüedad permite la aplicación del mismo a clínicas y laboratorios privados que no son comerciales o industriales, y que solo desarrollan sus actividades dentro del marco del ejercicio profesional, lo que les exime del pago de gravámenes o impuestos, tal como lo ha previsto la Constitución Nacional en su artículo 40.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL el punto número 1.2.5.61 del artículo primero del Acuerdo Municipal N°8 de 26 de febrero de 1987 emitido por el Consejo Municipal del Distrito de David y NIEGA el pronunciamiento solicitado por el recurrente en cuanto a la declaratoria de ilegalidad del aforo del Tesorero Municipal del Distrito de David, girado a la Clínica Particular del señor CARLOS ORTIZ por las razones expuestas.

NOTIFIQUESE
EDGARDO MOLINA MOLA

MIRTA ANGELICA FRANCESCHI
DE AGUILERA

ARTURO HOYOS

ANALIS DE GERNADO
Secretaria Encargada

Panamá, 30 de julio de 1993
Analís de Gernado
Secretaria

Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo
Es Copia de su Original

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Fallo del 19 de noviembre de 1993

MAGISTRADA PONENTE: AURA GUERRA DE VILLALAZ

Demandas de inconstitucionalidad interpuesta por el ledo. MARCO ANTONIO HERRERA MORE, en contra del SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL 2 DEL ART. 202 DEL LIBRO PRIMERO DEL CODIGO JUDICIAL Y DEL TERMINO RECURSO DE RECONSIDERACION contenido en el PARRAFO TERCERO, NUMERO 2 de la misma exenta.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-Pieno.- Panamá, diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993).-

V I S T O S:

El licenciado MARCO ANTONIO HERRERA MOW demandó la declaratoria de inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 202 del Código Judicial y la frase "que sólo será susceptible del recurso de reconsideración" contenida en el párrafo tercero de dicho artículo.

Una vez admitida la demanda, le fue corrida en traslado al Procurador General de la Administración, quien contestó el traslado en la vista N°295 del 17 de junio de 1993.

Continuando con la ritualidad establecida para esta clase de juicios, el negocio fue fijado en lista por el término de 10 días y se efectuaron las publicaciones del edicto correspondiente. Posterior a ello, tanto el demandante como un interesado presentaron argumentos por escrito sobre el caso. Por lo que habiéndose celebrado cada uno de los trámites de ley, toca al Pleno de la Corte decidir sobre los cargos de inconstitucionalidad presentados en esta acción.

Los hechos en que el demandante fundamenta la acción hacen mención de las leyes a través de las cuales se adoptó el Código Judicial y posteriormente se modificó, adicionó y derogó parte de dicho Código, el cual contempla el Título VIII denominado Deberes, Responsabilidades y Facultades de los Magistrados y Jueces, en cuyo texto se encuentra la norma que contiene el párrafo y la frase señalados de inconstitucional.

A continuación se transcribe el artículo 202 del Código Judicial, subrayándose el párrafo y frase considerados inconstitucionales por el

accionante:

"Artículo 202. Los Magistrados y Jueces tendrán las siguientes facultades disciplinarias:

1- Sancionar con multa de DIEZ BALBOAS (B/.10.00) a CINCUENTA BALBOAS (B/.50.00) a sus subalternos, a los demás empleados públicos y a los particulares que no cumplan o demoren sin causa justificada, las órdenes que dichas autoridades les imparten en ejercicio de sus funciones e imponer las demás multas que autoriza este Código. La multa se impondrá por resolución motivada, previo informe secretarial o comprobación sumaria y contra ella sólo procederá el recurso de reconsideración.

Ejecutoriada la resolución que impone una multa, si no se consigna su valor, se

convertirá en arresto a razón de DOS BALBOAS (B/.2.00) por cada día y sin exceder de veinte días.

2- Imponer pena de arresto hasta por cinco días a quienes le falten el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

Para imponer esta pena es necesario comprobar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho o con prueba testimonial sumaria.

La sanción se impondrá por medio de resolución motivada, que sólo será susceptible del recurso de reconsideración dentro de los tres días siguientes a su notificación personal.

En firme la resolución, se remitirá copia de ella al correspondiente funcionario de

policía del lugar, quien deberá cumplirla inmediatamente;

3- Expulsar de las audiencias a quienes perturben su curso;

4- Sancionar con multa de DIEZ BALBOAS (B/.10.00) a CINCUENTA BALBOAS

(B/.50.00) a los patronos o representantes legales de la empresa que impidan a sus trabajadores la comparecencia al despacho judicial para rendir declaración o para atender cualesquiera otra citación que se les haga".

Sostiene el licenciado Herrera Moro que la disposición constitucional que establece inconstitucional el artículo 32, cuyo contenido es el siguiente:

"ARTICULO 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policial o disciplinaria".

En cuanto al concepto de la infracción, manifiesta el demandante que el artículo 32 resulta violado en concepto de violación directa "toda vez que la imposición de la pena que postula -entiéndase el artículo 202 del Código Judicial-, se sustentará autojudiza y unilateralmente en la certificación de un empleado de la oficina donde labora el Magistrado o Juez o conforme a la prueba testimonial sumaria, que se reflejará en la deposición de subalternos, los cuales, dado el tenor reverencial, deberán proceder acorde a los dictados de su superior, en perjuicio del sancionado y sin que se satisfa el contradicitorio que debe regir el trámite legal conforme al debido proceso".

Expresa el letrado que a la persona que se persigue sancionar debe dársele todas las garantías procesales que contempla el debido proceso, ya que el artículo 202 no está desarrollando el artículo 33 de la Constitución Nacional que si permite sancionar sin juicio previo, lo que el procedimiento que establece la norma procesal presupone un juicio disciplinario previo, el cual debe surtirse conforme al artículo 32 de la Constitución que garantiza el debido proceso.

Con relación a la frase "que sólo será susceptible el recurso de reconsideración", alega el accionante que ésta frase viola directamente el artículo 32 de la Constitución, puesto que viola contra el principio rector de la doble instancia al dejar en manos del mismo juzgador la posibilidad migratoria de comparecer el agredido. En ese sentido, considera que es el recurso de apelación el que debe suscitar el juzgador, que así de manera más rápida se dará respuesta a la querella (f. 1-5).

El Procurador de la Administración contestó el traslado que le fue corrido, en el cual después de analizar las alegaciones hechas por el demandante, llega a la conclusión de que el párrafo y frase del artículo 202 acusados de inconstitucionales, no violan el artículo 32 de la Constitución Nacional, "ya que para imponer la pena de que trata el numeral 2 del artículo 202, se exige que sea comprobada con la certificación de un empleado de la oficina "que haya presenciado el hecho" (NO CUALQUIER FUNCIONARIO) o con prueba testimonial sumaria, además que se puede impugnar la resolución a través del recurso de reconsideración".

Anota el Procurador que contrario a lo que expone el actor, quedan salvaguardados los presupuestos del artículo 32 de la Constitución y no se violenta la garantía del debido proceso legal que este artículo consagra (fs.9-15).

Por su parte, el licenciado Adolfo Alberto Benedetti Evans, licenciado en Derecho y facultad que lo conforma el artículo 2555 del Código Judicial y, dentro del término correspondiente, presentó argumentos escritos sobre el caso.

El interviniente llevó como agravio las alegaciones del demandante, todo vez que considera que "la aplicación indiscriminada de los preceptos acusatorios ante inconstitucionalmente probatoria al resto de los profesionales del derecho y a los diligentes a través de la voluntad comunitaria y comprensión de los juzgadores sobre particularizadas o supuestas que por alguna circunstancia se fueran libres de las penas o destachadas de los juzgados sin que los mismos procedan en consecuencia una morigeración procesal en la defensa constitucional o en su ejercicio plenamente en la materia judicial y sin la más que obviamente las garantías que constituyen fundamentales que consigna la Constitución".

Por otro aspecto el licenciado Benedetti sostuvo que "los competidores privados que ocupa la Corte Federal tienen la obligación de tener el artículo 202 del Código Judicial restaurado porque es la justicia constituye un reflejo de la cultura social de los juzgados que convierten al juez en un juez de la justicia, fuerza transformar la

voluntad tanto del juzgador como de sus respectivos patrocinadores".

Todo esto en detrimento del derecho que tienen los ciudadanos de ejercer sus oficios dentro de los parámetros de seguridad y protección profesional (fs. 23-24).

El demandante, licenciado Herrera Mow, también presentó argumentos por escrito. Al reafirmar las alegaciones planteadas en la demanda, señala que en el proceso disciplinario que contempla el artículo 202 del Código Judicial, no se surte el debido proceso legal, ya que dentro del proceso disciplinario se debe hacer imperioso escuchar los descargos que el eventual sancionado presente, para luego de ello comprobar entre ambas versiones o elementos de pruebas cuál es más idónea a fin de que amerite o no una sanción. Anota el alegante que la inconstitucionalidad de la norma radica en la forma en que se hace esa comprobación.

En ese sentido menciona que la certificación que debe hacer el empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, aparte de ser sospechosa, no se sorte conforme al principio del contradicitorio.

Hechas las anotaciones sobresalientes de cada una de las posiciones presentadas durante la sustanciación de esta demanda de inconstitucionalidad, corresponde al Pleno de la Corte exponer las consideraciones en torno al debate que se plantea.

Previamente se hace necesario establecer que lo que se cuestiona en esta acción no es la facultad del juez o magistrado de imponer sanciones disciplinarias a quienes les faltan "el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas". Facultad que, demás está decir, es una regla imperiosa de ética, que consiste "en respetar al juez, al propio tiempo que exigir al juez igual respeto" (BORGES CABRA, Marco Gerardo, *Etica del Abogado*, Librería Jurídica Willhems, Colombia, 1995, pág. 45) y que se ejerce no solamente en contra de los abogados que gestionan ante los despachos judiciales, sino también contra las partes, particulares o público en general.

El accionante claramente ha determinado que es el procedimiento que se sigue en el juicio disciplinario que dispone el artículo 202 del

Código Judicial, según su criterio, violenta el principio del debido proceso, fundamentalmente porque no se contempla la realización de un juicio previo en el cual la parte contraria al juez pueda hacer los descargos correspondientes y porque la prueba que se practica antes de decidir la pena de arresto es ofrecida por un testigo sospechoso y por último, porque el principio de la doble instancia no tiene cabida en la norma denunciada.

Tal como lo anotó el Procurador en su Vista ya comentada, esta Corte ha sentado jurisprudencia en el sentido de que el principio del debido proceso contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional involucra tres aspectos: 1. El derecho a ser juzgado por el juez competente previsto en la ley; 2. El derecho a que el proceso se lleve a cabo de conformidad con los trámites previamente establecidos por la ley; y 3. El derecho a ser juzgado por una sola vez.

De lo planteado por el actor, se colige que el segundo de estos tres elementos es el que resultaría vulnerado por el párrafo y la frase del artículo 202 del Código Judicial que han considerado como inconstitucionales.

La Corte no opina igual. El mencionado artículo 202 guarda relación con una sanción disciplinaria a que se harán merecedores quienes le faltan el debido respeto al juez en el ejercicio de sus funciones o por razón de oficio, es decir, por causa que procede especialmente, independiente y de distinta naturaleza de las personas civiles o penales que consagra el Código Judicial. En este respecto hay que recordar que precisamente la naturaleza de las que son las sanciones la que va a establecer la clase de procedimientos que se cumplirán de acuerdo.

El artículo 202 lo obliga a los jueces y magistrados a seguir disciplinario consistente en imponer pena desproporcionada para faltas a oficios, como tienen efecto, los faltas al debido respeto. Seguidamente dice lo siguiente: que "para imponer sanción se necesita comprobar la falta con certeza y que sea impropia de la oficina que haya perpetrado el juez en su ejercicio profesional". Y aquí evidentemente el punto es que la sanción disciplinaria implica

dicte, "sólo será susceptible del recurso de reconsideración...". Es este precisamente el trámite previamente establecido por la ley a través del cual debe llevarse a cabo el proceso disciplinario. Proceso que, en todo caso, es distinto al que se surte ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados por faltas a la ética, las cuales en veintiséis causales describe el artículo 31 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.

El hecho que da origen al procedimiento que el abogado acusa califica de *inconstitucional*, es una ofensa que se hace a la persona e investidura del juez. Siendo que dicha ofensa, en principio, se puede proferir de manera regular en el despacho judicial, obviamente deben resultar como testigos funcionarios del despacho. No puede afirmarse que la certificación que rinda este funcionario tenga el carácter *insospechosa*, a la luz de lo que prevé el artículo 896 del Código Judicial, artículo que se refiere a los supuestos de testimonios suspiciosos sobre todo para los procesos surgidos a raíz de pretensiones legítimas.

El juez o magistrado es el titular del despacho, y como tal representa a la justicia, además de estar investido de autoridad. Tiene una sagrada función que ejerce y en el cumplimiento de ella merece y debe respeto de la misma forma en que correlativamente merecen y deben respetar los ciudadanos que asistían a sus audiencias determinadas de ese servicio judicial.

El accionante considera que el incidente en el cual el juez es objeto de interpretar por parte de tercera personas tiene que someterse a los trámites regulares y ordinarios de un proceso disciplinario. El legislador no lo consideró así y por ello crea una�anancia de elementos de tipo sumario. Esta procedencia no responde a las realidades presentes en la ley y a criterio del Poder no es adecuado que el juez permanezca, sin tener conocimiento, el hecho de operar contra él un régimen procesal que no es el que él demanda y que le resta dignidad. Debería ser respetado el respeto que cada juez tiene por su profesión, de la cual depende su dignidad y condición social. La legislación, en su mayoría, de los Estados Unidos, por ejemplo, establece tales leyes para proteger el trabajo judicial y que el juez sea informado de las acciones que se realizan en su contra.

través del recurso de reconsideración; y peor aún, esto conduciría a dejar sin efecto más de diez normas de dicho Código que establecen la irrecurribilidad de algunas decisiones, es decir, ni siquiera es admisible el recurso de reconsideración.

El procedimiento que contempla el Código no es antojadizo, como tampoco es omnímodo el poder que tiene el juez. Este tiene la responsabilidad de guardar el orden y velar por el debido funcionamiento del despacho a su cargo, en ocasiones, por esa misma razón es objeto de insultos, ofensas e incluso de agresiones verbales y hasta físicas; cuando esta situación se da, necesariamente hay que construir los mecanismos de reacción y solución jurídicos con efectos persuasivos, exemplarizantes y expeditos. ¿Acaso podría tal solución encontrarse sometiendo ese incidente a los trámites legales ordinarios? Definitivamente la respuesta es negativa ya que propiciaría el irrespeto, el caos y el desorden.

La premura en resolver faltas disciplinarias de la índole que sanciona el segundo párrafo del numeral 2 del artículo 202, amerita trámites también expeditos, que permiten reestablecer el equilibrio y sosiego dentro del ambiente de respeto y seguridad que debe rodear la delicada función pública de administrar justicia. A criterio de la Corte, ese procedimiento no es violatorio del derecho fundamental del debido proceso que la Constitución consagra a favor de los ciudadanos.

El demandante perdió de vista el contenido del artículo 33 de la Constitución Política vigente, que prevé la posibilidad de que algunos servidores públicos puedan sancionar sin juicio previo, dándose el caso específico del numeral 19 que dice:

"ARTICULO 33. Pueden penar sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos de la ley:

1. Los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción, quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo del desempeño de las mismas.

2. Los jefes de la Fuerza Pública, quienes pueden imponer penas de arresto a sus subalternos para contener una insubordinación, un motín o por falta disciplinaria.

3. Los capitanes de buques o aeronaves quienes estando fuera de puerto tienen facultad para contener una insubordinación o motín o mantener el orden a bordo, y para detener provisionalmente a cualquier delinquiente real o presunto".

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, P. L. E. N. O,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de

EDICTOS EMPLAZATORIOS

EDICTO EMPLAZATORIO
La suscrita Asesora Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, en su calidad de Funcionario Instructor, en el presente Juicio de oposición No. 2977 a la solicitud de registro de la marca de fábrica "JET Y DISEÑO", distinguida con el No. 056842, en la Clase 25, incardinado por la sociedad **NOVEDADES ANTONIO S.A.**, a través de su representante Licenciado **ABRAHAM SOPER BALD**. Se le advierte al emplazado que de no comparecer dentro del término correspondiente se le nombraría un defensor de ausente con quien se continuará el juicio hasta el final.

EMPLAZA
Al Representante Legal de la sociedad **CONFECCIONES VERAQUES S.A.**, cuya placa de serie se despliega para que dentro del término de diez (10) días contados a partir de la última publicación del presente Edicto comparezca al juicio de oposición No. 2977, a la solicitud de registro de la marca de comercio "LIC. ROSARIA GONZALEZ MARCOS Fundadora" de registro de la marca de fábrica "JET Y DISEÑO", distinguida con el No. 056842, a la solicitud de parte interesada y en uso de sus facultades legales, por medio del presente Edicto.

de registro de la marca de fábrica "JET Y DISEÑO", distinguida con el No. 056842, en la Clase 25, incardinado por la sociedad **NOVEDADES ANTONIO S.A.**, a través de su representante Licenciado **ABRAHAM SOPER BALD**. Se le advierte al emplazado que de no comparecer dentro del término correspondiente se le nombraría un defensor de ausente con quien se continuará el juicio hasta el final.

Por lo tanto se fija el presente Edicto en lugar público y visible de la Dirección de Asesoria Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, hoy 21 de abril de 1994 y copias del mismo se tienen a disposición de parte interesada para su publicación.
LIC. ROSARIA GONZALEZ MARCOS Fundadora

Sustanciador
DESY M. HERRERA
Secretaria Ad Hoc
Ministerio de Comercio e Industrias
Dirección de Asesoria Legal
Es copia auténtica de su original
Panamá, 21 de abril de 1994
Director
L-308 544-05
Tercera publicación

EDICTO EMPLAZATORIO
La suscrita Asesora Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, en su calidad de Funcionario Instructor, en el presente Juicio de oposición No. 2938, a la solicitud de registro de la marca de comercio "PHILIPPE CHARRIOL", distinguida con el No. 059389, en la Clase 14, incardinado por la sociedad **PHILIPPE CHARRIOL**, a través de su representante **ICATA GONZALEZ RUIZ & ALEMÁN**. Se le advierte al emplazado que de no comparecer dentro del término correspondiente se le nombraría un defensor de ausente con quien se continuará el juicio hasta el final.

EMPLAZA
Al Representante Legal de la sociedad **BOSTON INVESTMENT ENTERPRISES CORP.**, cuyoparadero se desconoce para que dentro del término de diez (10) días contados a partir de la última publicación del presente Edicto comparezca por sí o por medio de su representante para observar sus derechos en el presente Juicio de oposición No. 2938, contrario a la solicitud de registro de la marca de comercio "PHILIPPE CHARRIOL", No. 059389, a la solicitud de parte interesada y en uso de sus facultades legales, por medio del presente Edicto.

Por lo tanto se fija el presente Edicto en lugar público y visible de la Dirección de Asesoria Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, hoy 21 de abril de 1994 y copias del mismo se tienen a disposición de parte interesada para su publicación.

LIC. IULIA CUPAS DE OLARTE
Funcionario
Sustanciador
DESY M. HERRERA
Secretaria Ad Hoc

Ministerio de Comercio e Industrias
Dirección de Asesoria Legal
Es copia auténtica de su original
Panamá, 21 de abril de 1994
Director

L-308 455-37
Tercera publicación

AVISOS COMERCIALES

AVISO

Yo, ERNESTO DARIO SCHVERA MARQUEZ, con cédula de identidad personal No. 84120-342, residente en Panamá, en la Calle 100, número 100, entre 5ta y 6ta Avenida, en la Ciudad Administrativa, inscribo la marca **HERMAN MILLER RIGHETTI S.A.**, con licencia número 4512 de 10 de marzo de 1992, ubicada en la localidad de Calle Primera, Corregimiento de San Pedro, Provincia de Panamá, a la cual Administrativa es la localidad **HERMAN MILLER RIGHETTI S.A.**, inscrita en el Registro Público Sociedad Mercantil, número 45500, Rollo 500, Imagen 33 y el Requerimiento número 46, en el señor **SEAT PE 574-ANS**, cerrado sobre el 30 de abril de 1994. Panamá, 22 de abril de 1994.
L-308 455-75
Tercera publicación.

AVISO

Al tenor del Artículo 77 del Código de Comercio de este país, dándose que mediante acuerdo de Comisión de Comercio venida expedición en la 19 de abril de 1994 ha venido en estudio en el Ministerio de Comercio de Panamá, la solicitud de **RESTAURANTE Y CAFETERIA ASTURIAS**, ubicada en Avenida Cinta, Calle 37, estando la señora **Gloria Sanchez**, residente en Panamá, 9 de abril de 1994.

NOTA

ESTADO DE PANAMA

Calle 5 de abril, 2000

Calle 5 de abril, 2000

Tercera publicación

AVISO

Dando cumplimiento al Artículo 77 del Código de Comercio de este país, que establece que dentro de los 30 días siguientes a la publicación del acuerdo de Comisión de Comercio de la fecha anterior, el Representante Legal del señor **SEAT PE 574-ANS**, cerrado sobre el 30 de abril de 1994. Panamá, 22 de abril de 1994.
L-308 455-16
Tercera publicación.

AVISO

Dando cumplimiento al Artículo 77 del Código de Comercio de este país, que establece que dentro de los 30 días siguientes a la publicación del acuerdo de Comisión de Comercio de la fecha anterior, el Representante Legal del señor **SEAT PE 574-ANS**, cerrado sobre el 30 de abril de 1994. Panamá, 22 de abril de 1994.
L-308 304-13
Tercera publicación.

AVISO

Dando cumplimiento al Artículo 77 del Código de Comercio de este país, que establece que dentro de los 30 días siguientes a la publicación del acuerdo de Comisión de Comercio de la fecha anterior, el Representante Legal del señor **SEAT PE 574-ANS**, cerrado sobre el 30 de abril de 1994. Panamá, 22 de abril de 1994.
L-308 304-13
Tercera publicación.

Yo, socio de la sociedad **NATION ENTERPRISES, INC.**

Imagen 0043, inscrito en el Registro Público Sociedad Mercantil, número 709942, Rollo 5414, Imagen 131v y el Representante Legal del señor **SEAT PE 574-ANS**, cerrado sobre el 30 de abril de 1994. Panamá, 22 de abril de 1994.
L-308 347-8
Tercera publicación.

AVISO DE DISCONTINUACION

De conformidad con la Ley de Aduana el público que mediante Escritura Pública Número 2168 del 19 de abril de 1994 de la Dirección General de Aduanas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se estableció la discontinuación de la actividad económica de la Sociedad **NATION ENTERPRISES, INC.**

En virtud de lo anterior, la actividad económica de la Sociedad **NATION ENTERPRISES, INC.** quedó suspendida y no podrá ejercerse.

ADVENTIS, S.A.

Imagen 0043, inscrito en el Registro Público Sociedad Mercantil, número 709942, Rollo 5414, Imagen 131v y el Representante Legal del señor **SEAT PE 574-ANS**, cerrado sobre el 30 de abril de 1994. Panamá, 22 de abril de 1994.
L-308 304-13
Tercera publicación.

MARTIN
Comerciador
L-308 459-56
Tercera publicación.

La Dirección General de Aduana, el 20 de febrero de 1994, registró la actividad económica de la Sociedad **MARTIN**, con licencia número 2020.

CERTIFICA
Que la sociedad **CANEDO INVESTMENT CORPORATION**

Se encuentra registrada en la Rég. 0063, Rollo 5616, imagen 181, desde el veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y uno.

Disuelta
Que dicha sociedad solvió su situación mediante Escritura Pública número 337 de 19 de enero de 1994, en la Vivienda Primaria del Circuito de Panamá, según consta en la Rég. 0063, Rollo 5616, imagen 181, que el 26 de febrero de 1994, se realizó la liquidación de la actividad económica.

Expedido y firmado en la Ciudad de Panamá el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro, a las 20-01-12-34 AM.

NOTA Esta certificación no es válida, no lleva sello ni firma de autoridad competente.

F. LINDO GARCIA
Administrador
Centro de

L-308 958.17

Única publicación

La Dirección General del Registro Público
Con vista a la Solicitud
2325

CERTIFICA

Que la sociedad DIFU-

NEG, S.A.
Se encuentra registrada en la Rchta 81924, Rolo 7517, Imagen 192, desde el once de diciembre de mil novecientos ochenta y uno.
Diseña
Que dicha sociedad

acuerda su disolución mediante Escritura Pública número 348 de 19 de enero de 1994, en la Notaría Primera del Circuito de Panamá, según consta al Rollo 42042 y la Imagen 59 Sección Microfilmcia -Mercantil- des-

de el 21 de abril de 1994. Expedida y firmado en la ciudad de Panamá, el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, a las 12:03:10.1 A.M.

no es válida si no lleva adheridos los timbres correspondientes.

ALFINO GUARDIA MARTIN Certificador

L-308 958.75

NOTA- Esta certificación

Única publicación

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03-94

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE COCO SOLO NORTE

AVISO

Desde las 9:00 a.m. y hasta las 10:00 a.m. del día 27 de abril de 1994, se recibirán propuestas en el Salón de Reuniones de la Autoridad Portuaria Nacional, ubicado en el tercer piso del Edificio Dorchester en la Vía España, para la Licitación Pública Nº 03-94 relativa a los Estudios y Diseños para la Rehabilitación del Puerto de Coco Solo Norte.

Las propuestas deben ser incluidas en dos (2) sobre cerradas, escritas en los formularios oficialmente preparados por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, los que se anexan a este Pliego de Cargos. Serán presentadas entre (3) ejemplares, uno de los cuales será el original y el cual se adherirán las estampillas fiscales que cubran el valor del papel sellado, y los otros dos copias. En los soportes, uno contendrá la información formal y técnica re-

querida, ajustada al Pliego de Cargos, y los otros sobre el precio y la forma de Propuesta.

Los propuestos deben ajustarse a las disposiciones del Código Fiscal al Decreto Nº 33 del 3 de mayo de 1985, al Decreto de Gabinete Nº 45 del 20 de febrero de 1990, al Decreto Nº 59 del 16 de abril de 1993, al Pliego de Cargos y, a demás preceptos legales vigentes.

La ejecución de este acto público se ha consignado dentro de la partida presupuestaria "Nº 2.01.1.2.0.04.01.504 del año 1994, con la debida aprobación de la Contraloría General de la Rep. Pública".

El día 13 de abril de 1994 a las 10:00 a.m. se realizará una reunión previa en las oficinas de la Dirección de Ingeniería, ubicadas en el Edificio 29-B en Balboa, para comentar a consultas y observaciones sobre cualquier aspecto del Pliego de Cargos.

Los proponentes podrán obtener el Pliego de Cargos, a partir de la fecha de la publicación de este aviso, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., en las oficinas de la Dirección de Ingeniería y a un costo de B/. 15.00

pagaderos en la Caja del Depto. de Tesorería, reembolsables a los propietarios que participen en este acto público, previa devolución en buen estado de los referidos documentos.

Las copias adicionales de cualquier documento incluido en el Pliego de Cargos que soliciten los interesados serán suministradas al costo pero éste no será reembolsado.

JERRY SALAZAR
Director Ejecutivo
Autoridad Portuaria Nacional

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04-94

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSAS DE LOS MUELLES A-3/A-5 ATUN DEL PUERTO DE VACAMONTE

AVISO

Desde las 9:00 a.m. y hasta las 10:00 a.m. del día 29 de abril de 1994, se recibirán propuestas en el Salón de Reuniones de la Autoridad Portuaria Nacional, ubicado en el tercer piso del Edificio Dorchester en la Vía España, para la Licitación Pública Nº 04-94 relativa a la Rehabilitación del Sistema de Defensas de los Muelles A-3/A-5 Atún del Puerto de Vacamonte.

La ejecución de este acto

ma de Defensa de los Muelles A-3/A-5 Atún del Puerto de Vacamonte.

Los propuestos deben ser incluidos en un (1) sobre cerrado, escrito en los formularios oficialmente preparados por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, los que se anexan a este Pliego de Cargos. Y presentadas en tres (3) ejemplares, uno de los cuales será el original y el cual se adherirán las estampillas fiscales que cubran el valor del papel sellado,

contendrá la información requerida, y el precio de la oferta. Los otros dos ejemplares serán copias del original.

Los propuestos deben ajustarse a las disposiciones del Código Fiscal al Decreto Nº 33 del 3 de mayo de 1985, al Decreto de Gabinete Nº 45 del 20 de febrero de 1990, al Pliego de Cargos y, a demás preceptos legales vigentes.

La ejecución de este acto público se ha consignado dentro de la partida presupuestaria "Nº 2.01.1.2.0.03.01.504 del año 1994, y la correspondiente al año 1995 con la debida aceptación de la

Contraloría General de la República.

El día 14 de abril de 1994 a las 10:00 a.m. se realizará una reunión previa en las oficinas de la Dirección de Ingeniería, ubicadas en el Edificio 29-B en Balboa, para contestar a consultas y observaciones sobre cualquier aspecto del Pliego de Cargos.

Los proponentes podrán obtener el Pliego de Cargos, a partir de la fecha de la publicación de este aviso, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., en las oficinas de la Dirección de Ingeniería y a un costo de B/. 50.00 pagaderos en la Caja del Depto. de Tesorería, reembolsables a los propietarios que participen en este acto público, previa devolución en buen estado de los referidos documentos.

Las copias adicionales de cualquier documento incluido en el Pliego de Cargos que soliciten los interesados serán suministradas al costo pero éste no será reembolsado.

JERRY SALAZAR
Director Ejecutivo
Autoridad Portuaria Nacional

INTERPRETE PÚBLICO

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

RESUELVE Nº 92

Panamá, 19 de abril de 1994

INTERPRETE PÚBLICO

Mediante acuerdo legal, BELISARIO JOSE PORRAS SCHULTE WREDE, varón, panameño, mayor de edad; con cédula de identidad personal N° 3-365-375, con domicilio en la ciudad de Panamá, solicitó al Ministerio de Gobierno y Justicia, se le contrate el TUTUO de INTERPRETE PÚBLICO en los

Idiomas del INGRES al ESPAÑOL y viceversa.

Para fundamentar su pretensión se adjuntaron los siguientes documentos:

- Pequeño y solícito en papel sellado.
- Fotocopia de la cédula de identidad personal donde consta que el señor es panameño.
- Certificaciones expedidas por la Dra. Aura Guerra de Vindel, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Lic. Diana Ros Vásquez, magistrada Subjefe de la

Corte Sup. en C. de Justicia dictando y concediendo el mencionado y que siempre ha demostrado buena conducta.

- Certificaciones suscritas por los profesionales ministradores, Abel Rymy y Cynthia E. Garvareas, con lo cual acredita su idoneidad para actuar en el Rollo de INTERPRETE PÚBLICO en los idiomas del INGRES al ESPAÑOL y viceversa.
- Curriculum académico.

Como el petenciario re-

sponde a los requisitos exigidos por los artículos 2140 y 2141 del Código Administrativo, reformado por la Ley 33 de 8 de noviembre de 1992 y el Artículo 2142 del mismo Código.

EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

en uso de sus facultades legales,

RESUELVE

CONFERIR a BELISARIO JOSE PORRAS SCHULTE WREDE, con cédula de identidad personal N° 3-365-375, el TUTUO de INTERPRETE PÚBLICO en los

idiomas del INGRES al ESPAÑOL y viceversa.

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE

JACOBIL L. SALAS
Ministro de Gobierno y Justicia

UC. CARLOS RAUL TRUJILLO SAGEL
Viceministro de Gobierno y Justicia

El fe. copia de su original
Dirección de Asesoría Legal
L-308 707.02
Única publicación

EDICTOS AGRARIOS

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Creación Naciónal de

Reforma Agraria
Región 5 Panamá Centro
EDICTO N° 002 DR-94
El suscrito Fundador

Sustitución de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en la Provincia de Panamá, la cual

HACE SABER
Que el señor DAMASO GRAELL MUÑOZ, vecino

de CHICA, del Corregimiento del CHICA, Distrito de CHAME, portador de la cédula de identidad

personal No 8-28-860, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud No 8-125-91, según pliego aprobado No 803-05-10853, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra batible, monial adquirible, con una superficie de 6 has + 8857.18 M2, que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El terreno se encuentra ubicado en la localidad de CHICA, Corregimiento de CHICA, Distrito de CHAME, provincia de PANAMA, comprendido dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Cañón de m-08 Mts. y terreno de Dolores Martínez.

SUR: Camino de tierra interseca Calle a Chica 1.500 Mts.

ESTE: Terrenos de Orlando Rodríguez, Dolores Martínez y Calle de herencia.

OESTE: Terrenos de Justo Navarro Pedro Martínez y colección.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de CHAME o en el Corregimiento CHICA y copias del mismo se entregan al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Artículo 108 del Código Agrario.

Este Edicto tendrá una vigencia de alcance (15) días a partir de la última publicación Dado en Chepo, a los 21 días del mes de abril de 1994.

VICTOR NAVARRO
Funcionario
Sustanciador
MAGNOLA DE MEJIA
Secretaria Ad-Hoc
L-308 645-42
Única publicación

MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
Dirección Nacional de
Reforma Agraria
EDICTO No 5-61-94
Única publicación

El suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en la Oficina de Chepo, a su público

que la señora CESARIA VARGAS DE LEON Y OTRO vecina de SUEÑOS AREAS, Corregimiento del CAÑA, Distrito de CHAPE, propietaria de la parcela de terreno que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Que la señora AMERICA AURORA ERNE URIBE vecina del Corregimiento de CHAPE, del Distrito de CHAPE, provincia de PANAMA, propietaria de la parcela de terreno que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Que el señor JESUS RODRIGUEZ, vecino de SUEÑOS AREAS, Corregimiento del CAÑA, Distrito de CHAPE, propietario de la parcela de terreno que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Que el señor JESUS RODRIGUEZ,

personal No 8-28-860, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud No 8-125-91, según pliego aprobado No 803-05-10853, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra batible, monial adquirible, con un área superficial de 16 Has + 3590.71 m2, ubicada en el Corregimiento de PANAMA, ubicado en la Provincia de PANAMA, comprendido dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Cesaria Vargas De León y otros
SUR: Rio Cartia

ESTE: Alejandra Gonzalez y Rio Bruto de Cartia
OESTE: Rio Cartia

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de CHEPO, o en la Corregiduría de CANITA y copia del mismo se entregan al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Artículo 108 del Código Agrario.

Este Edicto tendrá una vigencia de alcance (15) días a partir de la última publicación Dado en Chepo, a los 21 días del mes de abril de 1994.

VICTOR NAVARRO
Funcionario
Sustanciador
MAGNOLA DE MEJIA
Secretaria Ad-Hoc
L-308 645-42
Única publicación

MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
Dirección Nacional de
Reforma Agraria
EDICTO No 5-61-94
Única publicación

El suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en la Oficina de Chepo, a su público

que el señor ENRIQUE VARGAS CEDENO vecino del Corregimiento de PACHONA, del Distrito de PANAMA, propietario de la parcela de terreno que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Que el señor ENRIQUE VARGAS CEDENO, vecino del Corregimiento de PACHONA, del Distrito de PANAMA, propietario de la parcela de terreno que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Que el señor JESUS RODRIGUEZ, vecino de SUEÑOS AREAS, Corregimiento del CAÑA, Distrito de CHAPE, propietario de la parcela de terreno que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Que el señor JESUS RODRIGUEZ, vecino de SUEÑOS AREAS, Corregimiento del CAÑA, Distrito de CHAPE, propietario de la parcela de terreno que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Que el señor JESUS RODRIGUEZ, vecino de SUEÑOS AREAS, Corregimiento del CAÑA, Distrito de CHAPE, propietario de la parcela de terreno que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Que el señor JESUS RODRIGUEZ, vecino de SUEÑOS AREAS, Corregimiento del CAÑA, Distrito de CHAPE, propietario de la parcela de terreno que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Que el señor JESUS RODRIGUEZ, vecino de SUEÑOS AREAS, Corregimiento del CAÑA, Distrito de CHAPE, propietario de la parcela de terreno que forma parte de la Finca 17.358 inscrita al Tomo 436, Folio 8, de la propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho, en el Corregimiento de CANITA, Distrito de CHEPO, Provincia de Panamá, comprendido dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Cesaria Vargas De León y otros
SUR: Rio Cartia

ESTE: Alejandra Gonzalez y Rio Bruto de Cartia
OESTE: Rio Cartia

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de CHEPO, o en la Corregiduría de CANITA y copia del mismo se entregan al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Artículo 108 del Código Agrario.

Este Edicto tendrá una vigencia de alcance (15) días a partir de la última publicación Dado en Chepo, a los 21 días del mes de abril de 1994.

DAMARIS VERGARA GUERRA
Funcionario
Sustanciador
SOLEDAD MARTINEZ CASTRO
Secretaria Ad-Hoc
L-308 652-52
Única publicación

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Dirección Nacional de Reforma Agraria
Área Metropolitana
EDICTO No 8-022-94
El suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en la Oficina de Panamá, al público

HACE SABER:

Que la señora BASILIA DE GRACIA DELGADO, vecina del Corregimiento de CHUBRE, Distrito de PANAMA, portadora de la cédula de identidad personal No 9-141-298 ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud No 8-022-94 la adjudicación a título oneroso de un terreno que forma parte de la Finca 5-620 inscrita al Tomo 206, Folio 2527, de propiedad del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, de un área superficial de 0 has + 1594.82 m2, ubicado en el Corregimiento de CHUBRE, Distrito de PANAMA, Provincia de Panamá, comprendiendo dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Vereda, Bosque de Palacios
SUR: Gabriel Delgado, Andrés Miranda

ESTE: Bosque Palacios, Andrés Miranda
OESTE: Francisco González, José Pérez Uriza

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho, en el Corregimiento CHUBRE y las copias del mismo se entregan al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Artículo 108 del Código Agrario.

Este Edicto tendrá una vigencia de alcance (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Panamá, a los

ventúin (21) días del mes de abril de 1994.

LUCIO DARIO MONTERO M.
Funcionario
Sustanciador
ALMA B. DE JAEN
Secretaria Ad-Hoc.
L-308 643.11
Única publicación

MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
Dirección Nacional de
Reforma Agraria
Región N° 2, Veraguas

EDICTO N° 29-94
El suscrito Funcionario
Sustanciador de la Di-
rección Nacional de
Reforma Agraria, en la
Provincia de Veraguas
al público:

HACE SABER:

Que el señor BOSCO
RAMON POLO PINILLA,
vecino de PARITA, Co-
regimiento de CABE-
CERA del Distrito de
PARITA, portador de la
cédula de identidad
personal No. 6-30-927,
ha solicitado a la Di-
rección Nacional de
Reforma Agraria, me-
diante solicitud No. 9-
1118, según plano
aprobado No. 910-03-
8091, la adjudicación a
título oneroso de una
parcela dentro de la
Parcela N° 1000-10-
1118, con una super-
ficie de 7 Hectáreas +
5440.76 M2, ubicada
en CAVANA, Co-
regimiento de CALI-
DONIA, Distrito de
SONA Provincia de VE-
RAGUAS, comprendido
dentro de los siguientes
límites:

NORTE: Camino de feria que conduce a
Cahumales
SUR: Clemento Albar-
sadas y Juan Vásquez
ESTE: Demetrio Albar-
sadas
OESTE: Juan Vásquez

Parámetros efectos legales
se han establecido en la
lugar visto de este Edicto
en la Comunidad de RON-
DO en la Comarca de
CALIDONIA, el día 12 de
abril de 1994, para que los
funcionarios de los ór-
ganos de ejecución
de la ley, resguarden
y cumplan lo establecido
en el Artículo 106 del Código
Agrario, este Edicto
quedará vigente de
quinientos (500) días a parti-
re de la fecha de la misma
publicación.

CALI, 10 de mayo de
1994, a los 25 días
del mes de enero de
1994.

ALVARO MATEO

VERGARA GUERRERO
Funcionario
Sustanciador
TOMASA JIMENEZ
CAMARENA
Secretaria Ad-Hoc.
L-112367
Única publicación

MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
Dirección Nacional de
Reforma Agraria
Región N° 2, Veraguas

EDICTO N° 28-94
El suscrito Funcionario
Sustanciador de la Di-
rección Nacional de
Reforma Agraria, en la
Provincia de Veraguas
al público:

HACE SABER:

Que el señor ANDRES
AVELINO SANCHEZ
URRIOLA, vecino del
Corregimiento de CA-
BECERA, Distrito de
CHITRE, portador de la
cédula de identidad
personal No. 6-52-674
personal No. 6-30-927,
ha solicitado a la Direc-
ción Nacional de Re-
forma Agraria, mediante
solicitud No. 9-1119, se-
gun plano aprobado
No. 910-03-8094, la ad-
judicación a título ono-
roso de una parcela de
tierra dentro de la
Parcela N° 1000-10-
1118, con una super-
ficie de 41 Hectáreas +
6153.15 M2, ubicada
en el Corregimiento de
LEONES del Distrito de
LAS MINAS, de esta
Provincia, cuyos
límites son los siguien-
tes:

NORTE: Virgilio Albar-
sadas
SUR: Rovellano
ESTE: Agusto Peverino
Portillo Teyes
OESTE: Clemento
Albar-sadas

Parámetros efectos legales
se han establecido en la
lugar visto de este Edicto
en la Alcaldía del
Distrito de LAS MINAS, en
la Comunidad de
VILLAS, para que los
funcionarios de los ór-
ganos de ejecución
de la ley, resguarden
y cumplan lo establecido
en el Artículo 106 del
Código Agrario, este
Edicto quedará vigente
de quinientos (500) días a
partir de la fecha de la
misma publicación.

Quindio, 10 de mayo de
1994.

AGUSTIN MATTO
VERGARA GUERRERO
Funcionario
Sustanciador
TOMASA JIMENEZ
CAMARENA
Secretaria Ad-Hoc.

Sustanciador
TOMASA JIMENEZ
CAMARENA
Secretaria Ad-Hoc.
L-112366
Única publicación

MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
Dept. de Reforma
Agraria
Región 3, Herrera
EDICTO N° 088-93

El suscrito Funcionario
Sustanciador del Ministerio
de Desarrollo
Agropecuario de la
Oficina de Reforma
Agraria, Región 3,
Herrera:

HACE SABER:

Que el señor NICANOR
PEREZ ESCRIBANO, ve-
cino del Corregimiento
de CERRO DE PAJA,
Distrito de LOS POZOS,
portador de la cédula de
identidad personal No. 6-47-2740, ha solicita-
do al Ministerio de
Desarrollo Agropecu-
ario, Oficina de Re-
forma Agraria, me-
diante solicitud N° 8724,
la adjudicación a título
oneroso, una parcela
de tierra estatal
adjudicable, con una
superficie de 12 Hectáreas +
5812.52 M2, ubicada
en el Corregimiento de
CERRO DE PAJA, del
Distrito de LOS POZOS,
de esta Provincia, cuyos
límites son los siguien-
tes:

NORTE: Benjamín Pinto
SUR: Cirilo Pinto
ESTE: Octavio Atila -
Benjamín Pinto
OESTE: Joséfa Quintero -
Inocente Pérez Escrivano

Parámetros efectos legales
se han establecido en la
lugar visto de este Edicto
en la Alcaldía del
Distrito de LAS MINAS, y
se establece que las hojas
que integran el mismo se
entregarán al interesado
para que las haga
publicar en los órganos
de publicidad correspondientes,
tal como lo establece el Art. 106
del Código Agrario.
Este Edicto tendrá una
vigencia de quinientos
(500) días laborables
desde la última publica-
ción.

Datado en Cali a los 25
días del mes de mayo
de 1994.

PUBLICACIONES:
Fundación
ESTERIO DE CAFE
Secretaría Ad-Hoc
L-115167

a.j.
Única publicación
R.

MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
Dept. de Reforma
Agraria
Región 3, Herrera
EDICTO N° 088-93

El suscrito Funcionario
Sustanciador del Ministerio
de Desarrollo
Agropecuario de la
Oficina de Reforma
Agraria, Región 3,
Herrera:

HACE SABER:

Que el señor ISMAEL
SANCHEZ URRIOLA, ve-
cino del Corregimiento
de CABECERA, Distrito
de CHITRE, portador de la
cédula de identidad
personal No. 6-20-607,
ha solicitado al Ministerio
de Desarrollo
Agropecuario, Oficina
de Reforma Agraria,
mediante solicitud N° 8724,
la adjudicación a título
oneroso una parcela de
tierra estatal
adjudicable, con una
superficie de 40 Hectáreas +
7291.36 M2, ubicada
en el Corregimiento de
LEONES, del Distrito de
LAS MINAS, de esta
Provincia, cuyos
límites son los siguientes:

NORTE: Roberto Gómez
SUR: Simón Sánchez Urrila -
Camino de Leones a
Río Buena Vista
ESTE: Camino de Leones
a Río Buena Vista
OESTE: Camino de Leones
a Las Lajitas

Para los efectos legales
se ha dejado el presente
Edicto en un lugar vi-
sible de este Departamento,
en la Alcaldía del Distrito de
LAS MINAS, y copias del
mismo se entregarán al interesado
para que las haga
publicar en los órganos
de publicidad corres-
pondientes, tal como
lo establece el Art. 106
del Código Agrario.
Este Edicto tendrá una
vigencia de quinientos
(500) días laborables
desde la última publi-
cación.

Datado en Cali a los 25
días del mes de mayo
de 1994.

PUBLICACIONES:
Fundación
ESTERIO DE CAFE
Secretaría Ad-Hoc
L-115168

Agraria
Región 3, Herrera
EDICTO N° 087-93

El Funcionario Sustan-
ciador del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario
de la Oficina de Reforma
Agraria, Región 3,
Herrera:

HACE SABER:
Que el señor ISMAEL
SANCHEZ URRIOLA, ve-
cino del Corregimiento
de CABECERA, Distrito
de CHITRE, portador de la
cédula de identidad
personal No. 6-20-607,
ha solicitado al Ministerio
de Desarrollo
Agropecuario, Oficina
de Reforma Agraria,
mediante solicitud N° 8724,
la adjudicación a título
oneroso una parcela de
tierra estatal
adjudicable, con una
superficie de 40 Hectáreas +
7291.36 M2, ubicada
en el Corregimiento de
LEONES, del Distrito de
LAS MINAS, de esta
Provincia, cuyos
límites son los siguientes:

NORTE: Roberto Gómez
SUR: Simón Sánchez Urrila -
Camino de Leones a
Río Buena Vista
ESTE: Camino de Leones
a Río Buena Vista
OESTE: Camino de Leones
a Las Lajitas

Para los efectos legales
se ha dejado el presente
Edicto en un lugar vi-
sible de este Departamento,
en la Alcaldía del Distrito de
LAS MINAS, y copias del
mismo se entregarán al interesado
para que las haga
publicar en los órganos
de publicidad corres-
pondientes, tal como
lo establece el Art. 106
del Código Agrario.
Este Edicto tendrá una
vigencia de quinientos
(500) días laborables
desde la última publi-
cación.

Datado en Cali a los 27
días del mes de mayo
de 1994.

PUBLICACIONES:
Fundación
ESTERIO DE CAFE
Secretaría Ad-Hoc
L-115169